

Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos RIT O-13-2023, RUC 2340453496-3, del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, por sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se acogió la demanda de indemnización de perjuicios derivados de accidente del trabajo y se otorgó la suma de \$20.000.000 por concepto de daño moral.

La demandada dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, por decisión de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, lo acogió; en consecuencia, invalidó el fallo de mérito y dictó el de reemplazo, en que rechazó la demanda.

En contra de este último pronunciamiento, el demandante interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia consiste en determinar el concepto de daño moral y su extensión, precisando si se limita al sufrimiento o trastorno psicológico que experimenta una persona como resultado de un hecho específico, o si abarca una noción más amplia, vinculado con todas las esferas de la personalidad, incluido el daño corporal derivado de las lesiones físicas.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina contenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N° 969-2022, y por esta Corte en los antecedentes Rol N° 2547-2014, 735-2015, 12176-2017 y 7085-2017, todas las cuales decidieron la procedencia de la reparación por daño moral derivado de una lesión física, pese a



la ausencia de prueba específica sobre la afección psíquica o psicológica.

La primera fue pronunciada en contexto de un juicio sobre indemnización de perjuicios derivados de la detención ilegal, torturas y persecución política sufridas por parte de agentes del Estado, se estimó que la existencia de daño moral, en esas circunstancias, es tan natural y perceptible que es del todo razonable presumirlo, pues los tratos degradantes recibidos como consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, quienes abusaron de una posición de poder y engendraron en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, por lo que al tenor de los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante, puesto que los abusos que sufrió terminaron por consumirlo en la desazón.

La segunda corresponde a la sentencia de reemplazo dictada tras acogerse un recurso de unificación de jurisprudencia referido al sentido y alcance del deber de seguridad, establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que declaró que el daño moral que sigue a las lesiones corporales presenta la forma de una aflicción física y mental, que tiene por causa el accidente, y que es cualquier forma significativa de sufrimiento, comprensiva tanto del dolor consecuencia de las heridas y del tratamiento médico, de la pérdida de autoestima de quien está físicamente desfigurado y de la conciencia de la propia incapacidad.

La tercera abordó un recurso de casación promovido en contra de la que rechazó la demanda deducida por un cliente que experimentó una caída al interior de un supermercado, reiteró la postura previa de esta Corte en cuanto a que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, agregando que cuando el menoscabo deriva de las lesiones físicas sufridas por la víctima, se suele señalar por la doctrina y la jurisprudencia que sería un hecho de normal ocurrencia, por lo que su existencia puede colegirse mediante presunciones y acorde al principio de normalidad de las circunstancias en las que ocurre el hecho, de modo que si el daño moral se sigue del daño corporal es posible concluir que la víctima ha sufrido un daño de naturaleza no patrimonial que debe ser reparado. En conclusión, si bien el daño moral debe ser efectivo para que proceda su indemnización, su demostración va a depender de las circunstancias que lo originan y si éstas dicen relación con lesiones corporales, habrá de considerarse que éstas ordinariamente producen dolor físico, el que naturalmente integra el concepto de daño moral y al



que lógicamente se suman las molestias propias derivadas del tratamiento médico necesario para la recuperación de la lesión.

La siguiente, sobre la base del mismo razonamiento, concedió el daño moral originado en la caída que sufrió un niño desde el segundo piso de su colegio, reiterando que en determinadas situaciones, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo, de manera que en esas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula.

La última, aplicó la misma tesis jurídica respecto del daño moral reclamado por la víctima de un accidente de tránsito, atendido que en materia de daño moral la exigencia probatoria, sin ser necesariamente más laxa, es diferente, dados sus propios contornos y elementos configurativos, por lo que si bien no hay dudas de que el daño moral, para efectos determinar su responsabilidad civil, debe ser probado por quien lo reclama, es pacífico tanto en la doctrina como jurisprudencia, que cuando se trata del derivado de lesiones físicas, se trata de una circunstancia normal y esperable, susceptible de acreditarse mediante presunciones, que resultan un medio de prueba legal idóneo para ello. En consecuencia, resulta coherente con la lógica, e incluso configura una máxima de experiencia, entender que un daño corporal concreto, ocasiona un daño de naturaleza no patrimonial que debe ser reparado, pues debe tenerse presente, como un hecho de la naturaleza, dentro de los parámetros de la normalidad, que verificada la existencia de lesiones corporales, como sucede en la especie, ordinariamente producen dolor físico a quien las sufre, además de la afectación psicológica que conlleva, y un cúmulo de otras perniciosas consecuencias.

Tercero: Que la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad que dedujo la parte demandada, sobre la base de su motivo principal, esto es, del establecido en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por lo que omitió pronunciamiento sobre el planteado en subsidio, correspondiente al previsto en su artículo 477, acusando la infracción del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 432, 445 y 459 N°7 del Código del Trabajo.

Como fundamento de la decisión que se revisa, se consideró que la inobservancia al deber que impone la norma del artículo 456 del Código del Trabajo ocasiona una transgresión notoria al principio de razonabilidad, y que, en



el caso de la especie, el actor demandó daño moral, por lo que se recibió a prueba la efectividad de haber padecido tal daño, así como sus hechos y circunstancias, y el nexo causal entre el accidente y el daño moral, sin que nada justificara en tal sentido, pues no rindió probanzas relacionadas con el perjuicio reclamado, sin acreditar la existencia del hijo que dice cuidaba y con quien habría jugado hasta antes de sufrir el accidente laboral, el tipo de actividad física o deportiva que habría practicado en sus horarios de descanso, el estado depresivo que habría presentado, la eventual afectación de su salud mental o la pérdida de la alegría que habría sentido; se añadió que el fallo de mérito desarrolla extensos razonamientos decisorios en que únicamente se observan cuestionamientos acerca de la forma en que se encomendó al actor una tarea diversa a la que realizaba, que en esa circunstancia tuvo una caída, se lesionó su rodilla, fue intervenido quirúrgicamente y estuvo con reposo laboral, concluyendo de forma inmediata con la afirmación de habersele causado daño moral, lo que demuestra inequívocamente que se soslayó totalmente la falta de prueba sobre la discusión basal, el daño moral, cuestión obligatoria e ineludible por haberse contemplado en los hechos controvertidos.

Por consiguiente, se dictó el pronunciamiento de reemplazo, que rechazó la demanda debido a la falta de prueba sobre el daño moral y, en particular, acerca de las afirmaciones en que el actor lo hace consistir en su demanda.

Cuarto: Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto por esta Corte en las sentencias invocadas por el recurrente con lo decidido en la que se impugna, se concluye que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

Quinto: Que, como se advierte de las decisiones incorporadas por el demandante, esta Corte se ha pronunciado previamente en el sentido indicado, esto es, declarando que si bien el daño moral debe ser probado, como cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad civil, lo cierto es que tratándose del que deriva de lesiones corporales, como las experimentadas por el actor, ello puede conseguirse a través de las presunciones judiciales, las que se construyen sobre la base del conjunto de indicios que emanan de fuentes probatorias diversas, lo que es coherente con el sistema de valoración de la sana



crítica, especialmente con los principios de la lógica y las máximas de la experiencia. Existiendo en esta materia libertad probatoria lo relevante para efectos de tener por acreditada la existencia del daño moral en la persona que lo demanda son, precisamente, las inferencias que los sentenciadores pueden construir mediante el razonamiento judicial, como estructura de la decisión, exponiendo cuales son los elementos de convicción que lo justifican. Por consiguiente, asentar la existencia del daño extrapatrimonial en la forma descrita no importa desconocer que debe ser acreditado en juicio o bien eximir al actor de la carga de probar los requisitos de la responsabilidad civil.

Conforme lo señalado el daño moral puede inferirse del padecimiento físico que debió experimentar la víctima, del tratamiento médico a que debió someterse para superar su dolencia, de los efectos temporales de la lesión, entre otros; pero también de la naturaleza y del contexto del accidente que lo genera.

Sexto: Que dichas consideraciones deben ser contrastadas con los hechos establecidos en el caso, conforme a los cuales se dio por asentado que el actor sufrió un accidente de trabajo, en circunstancias que se le encomendó ejecutar tareas diversas a aquellas para las que fue contratado, lo que le ocasionó un daño físico, que la pericia practicada por el Servicio Médico Legal calificó como grave, dado que su recuperación tomó 60 días con igual periodo de incapacidad funcional, antecedente que precisa que las lesiones consistieron en “rotura de ligamento cruzado anterior operado con injerto autólogo, rotura de cápsula articular posterolateral izquierda operada”.

Así, no cabe duda que el actor, una persona de 34 años a la época de los hechos, con estudios técnicos de nivel medio, contratado por la demandada para realizar labores de testeo en contexto de la campaña sanitaria por COVID-19, sufrió una caída -padeciendo dolor físico e incapacidad funcional- que afectó de manera importante su rodilla izquierda, al punto que no sólo requirió atención médica inmediata, sino de un tratamiento que se prolongó en el tiempo, durante el cual se le practicó una cirugía y otros procedimientos, lo que determinó que debiera mantener reposo, con limitaciones de movilidad, quedando, en consecuencia, impedido de realizar su vida de manera normal y desarrollar sus rutinas laborales, familiares y de esparcimiento del modo que lo hacía antes de la ocurrencia del accidente.

De lo anterior, resulta lógico y razonable presumir, que el accidente y su posterior evolución causaron al actor un dolor y angustia que conforman un



menoscabo de carácter no patrimonial que la demandada se encuentra obligada a reparar, conforme a lo previsto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, en relación con el artículo 69 de la Ley N° 16.744 y con el artículo 184 del Código del Trabajo.

Séptimo: Que, en consecuencia, se unifica la jurisprudencia reiterando la postura permanente de esta Corte en términos que si bien el daño moral debe ser probado, como cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad civil, lo cierto es que tratándose del que deriva de heridas o lesiones corporales, ello puede conseguirse a través de las presunciones judiciales.

En tales circunstancias, debe colegirse que yerra la Corte de Apelaciones de Iquique cuando, al fallar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, resuelve que la sentencia del grado incurrió en el vicio denunciado consistente en la infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, el recurso de nulidad planteado debió ser desestimado, por cuanto los hechos asentados permitían dar por concurrentes cada uno de los presupuestos del daño moral demandado.

Octavo: Que, por las consideraciones antes dichas, no cabe sino acoger el presente recurso de unificación de jurisprudencia, invalidando el fallo impugnado, en la parte que hizo lugar al motivo principal del recurso de nulidad deducido por la demandada, el que debe ser rechazado en conformidad a los razonamientos precedentes.

Además, la parte formuló un motivo subsidiario, en que acusó la infracción de ley, en particular, del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 432, 445 y 459 N°7 del Código del Trabajo, de los cuales desprende que sólo es procedente la condena en costas a la parte que ha sido totalmente vencida, lo que no ocurrió en el caso; el que debe ser igualmente desestimado, dado que la decisión referida a las costas no es susceptible de ser impugnada mediante este arbitrio invalidatorio, destinado, conforme a la legislación que lo consagra, a atacar la sentencia definitiva, por cuanto si bien es un aspecto incorporado en dicha resolución judicial, se trata de una cuestión accesoria y ajena al dictamen sobre el asunto controvertido que constituye el objeto del juicio.

Noveno: Que decidido que se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante, que en consecuencia se invalida el



fallo impugnado, y que la correcta interpretación de la materia propuesta en el presente recurso determina el rechazo de la causal principal de nulidad planteada por la demandada, sin que pueda prosperar tampoco la subsidiaria por los motivos antes expresados, sólo resta por declarar que, en razón de aquello, la sentencia del grado no es nula.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que hizo lugar al de nulidad deducido respecto de la del grado, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por lo que se **rechaza** el arbitrio en todos sus extremos y se declara que la sentencia de mérito **no es nula**.

Acordada con el **voto** en contra de la **ministra Chevesich**, quién fue de opinión de rechazar el recurso, por las siguientes consideraciones:

I.- Que, como se consignó, la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la de instancia por estimar concurrente la causal consagrada en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, esto es, por haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las regla de la sana crítica; y dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo de la citada disposición, dictó la de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley, esto es, aquella en que tuvo por establecidos los hechos materia del juicio y que fueron el resultado del proceso intelectual de análisis de la prueba rendida por los litigantes en la etapa procesal pertinente, conforme la regla probatoria señalada, y en base a aquellos rechazó la demanda de indemnización de perjuicios derivada de un accidente laboral;

II. Que, en esas condiciones, a juicio de la disidente, para obtener una decisión favorable a los intereses de la parte demandante, lo que corresponde es modificar los presupuestos fácticos que se dieron por establecidos en la sentencia de reemplazo, con la finalidad de revivir, restablecer, los de la de instancia.

Pero, la estructura y finalidad del recurso de unificación de jurisprudencia no lo permite, pues esta Corte al conocer el recurso de unificación de jurisprudencia que plantean las partes debe analizar la materia de derecho formulada considerando los hechos que tienen el carácter de inamovibles, en el presente caso, por lo expresado, los de la sentencia de reemplazo, mas no realizar



consideraciones fácticas recurriendo al medio de prueba de las presunciones, con ello, establecer hechos, y concluir, como se advierte, que la Corte de Apelaciones de Iquique incurrió en yerro cuando al resolver el recurso de nulidad de la parte demandada decidió que la del grado incurrió en el vicio consistente en la infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, determinando su invalidación en la parte que hizo lugar al motivo principal del recurso de nulidad deducido por aquella, estimando que debe ser rechazado.

Además, porque esta Corte ha sostenido desde hace algún tiempo, de manera unánime y sostenida, incluso en la etapa de examen de admisibilidad de los recursos de unificación de jurisprudencia, que pretender lo que, en definitiva, ahora se persigue con el que se examina, no constituye un asunto jurídico habilitante del mismo, pues está dirigida a impugnar la argumentación dada en la sentencia impugnada respecto a la causal del artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, y no con la discusión de fondo del litigio, declarándolos inadmisibles.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 7.012-24.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Jessica González T., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la Abogada Integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.



En Santiago, a dieciséis de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

